



FISCALÍA ESTATAL.
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
05 de Septiembre de 2019.

INICIO DE SESIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°; 9° y 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 3°, 5°, 24 punto 1 fracción II, 25 punto 1 fracciones VII y X, 27, 28, 29 y 30 punto 1 fracción II, 31, 32 punto 1 fracción III y VIII, 78, 80, 84, 85, 86 y 86-Bis del Decreto 25653/LX/15 que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 de noviembre del año 2015, en el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que entró en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de su similar citado con antelación, así mismo conforme a lo señalado en la Legislación Estatal en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, el Comité de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, procede a celebrar la presente sesión de trabajo, concerniente al **procedimiento de clasificación inicial**

REGISTRO DE ASISTENCIA

De conformidad con lo establecido por los artículos 28 punto 1 fracciones I, II y III y 29 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar que la presente sesión se efectúa con la presencia de la **mayoría los integrantes** que conforman el Comité de Transparencia de la Fiscalía Estatal, que a continuación se señalan:

C. LIC. ANA MARÍA PÉREZ ESCOTO.

Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado.
Secretario del Comité.

C. LIC. RENÉ SALAZAR MONTES.

Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado
Suplente del Presidente del Comité de Transparencia de la Fiscalía del Estado.

ASUNTOS GENERALES

Asentada la constancia de **quórum**, la presente reunión tiene por objeto analizar y clasificar la información pública que fue requerida a esta Fiscalía Estatal, mediante solicitud de acceso a la información pública registrada en el índice de la Unidad de Transparencia con el número de expediente **LTAIPJ/FE/2237/2019**, relativo a la solicitud de acceso a la información pública recibida a través del sistema electrónico INFOMEX JALISCO incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a las 19:03 diecinueve horas con tres minutos del día 26 veintiséis de



Agosto del año 2019 dos mil diecinueve, el cual fue derivado a la Fiscalía Estatal, **por Incompetencia**, a través del **Expediente 1489/2019**, signado por el C. Carlos Alberto de Caso Muñoz, en su carácter de Coordinador de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; la cual fue recibida por el Sistema Infomex ante el sujeto obligado, recibida oficialmente a las 09:00 nueve horas del día hábil siguiente, en virtud de haber ingresado en hora inhábil para el sujeto obligado, asignándole el número de **folio 06136719**; por medio de la cual se solicita el acceso a la información que a continuación se transcribe:

"... SOLICITO SE ME ENTREGUE DE TODAS Y POR SEPARADO CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYENDO CONTRALORIA Y PROCURADURIA SOCIAL) LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

-NUMERO DE VACANTES DISPONIBLES PARA CONTRATAR ABOGADOS.

-NUMERO DE ABOGADOS CON QUE CUENTA CADA DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN O AREA JURÍDICA DE CADA SECRETARIA.

-NUMERO DE ABOGADOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÍA ESTAR CONTRATADOS PARA CADA AREA, OFICINA, DEPARTAMENTO DIRECCIÓN O AREA JURIDICA DE CADA SECRETARIA.

-NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES PARA REALIZAR PRACTICAS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN CADA AREA JURÍDICA, DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE CADA SECRETARIA.

-NOMBRE DE CADA ABOGADO ASIGNADO O QUE TRABAJA EN CADA DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN O AREA JURÍDICA. (LISTADO DE ABOGADOS POR ÁREA JURÍDICA O DEPARTAMENTO). ESTABLECIENDO LAS ÁREAS QUE ATIENDE O LOS TEMAS ATIENDE (QUE HACE CADA PERSONA QUE TRABAJA COMO ABOGADO)

-REQUISITOS PARA SER CONTRATADO COMO ABOGADO.

-REQUISITOS PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES COMO ABOGADO.

-EL SUELDO MINIMO Y MÁXIMO QUE SE PAGA A LOS ABOGADOS EN CADA AREA, DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO JURIDICO DE CADA SECRETARIA.

-SE ME INFORME SI A LOS ABOGADOS DE LAS SECRETARÍAS SE LES PAGA SEGURO DE GASTOS MEDICOS Y CON QUE ASEGURADORAS.

-SE ME DIGA HASTA QUE MONTO CUBRE EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS.

Solicito se me entreguen en archivo digital y copia certificada sin pago de impuesto las actas ordinarias y extraordinarias de todos los fideicomisos públicos que aparecen en la página del Gobierno Estatal. Las actas deben ser desde el inicio de la presente administración es decir desde el 05 de diciembre de 2018 y hasta la última acta a esta fecha (10 de mayo de 2019). Si es necesario realizar versiones públicas de las actas solicitadas se aceptarán las mismas.

Para la entrega del archivo en digital solicito se me envíen por correo electrónico. Se transcriben los nombres de los fideicomisos de los que se solicitan las actas.

1. Administración y fuente de pago con Santander
2. Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago Para la Atención de los Jaliscienses en el Extranjero
3. Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco
4. Fideicomiso de Administración y fuente de pago con Banamex
5. Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago para la Reestructura de la Deuda del SIAPA
6. Fideicomiso de Aportación para la Infraestructura Social y Municipal- FAIS
7. Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)
8. Fideicomiso de Desarrollo Rural- FIDERUR
9. Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco- FIDEUR
10. Fideicomiso de la alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)
11. Fideicomiso de la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco
12. Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de los Servidores Públicos de Base del O.P.D. del Hospital Civil de Guadalajara (-)
13. Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara- TZGM
14. Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado- TMIE
15. Fideicomiso de Turismo de San Juan de los Lagos



16. Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Guadalajara
17. Fideicomiso del Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta- Bahías Banderas
18. Fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Jalisco
19. Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado- FIPRODEFO
20. Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes- FECA
21. Fideicomiso Estero El Salado- FIDEES
22. Fideicomiso Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio- FOVIMJAL
23. Fideicomiso Fondo de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información- PTEI
24. Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología
25. Fideicomiso Fondo Metropolitano de Ocotlán
26. Fideicomiso IJAS
27. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Línea de Crédito Global Municipal
28. Fideicomiso Irrevocable de Garantía, Administración y Fuente Alterna de Pago Inxex (SOLUCASH)
29. Fideicomiso Jalisco Evalúa
30. Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
31. Fideicomiso para el Desarrollo de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria-SEVIC-JALISCO
32. Fideicomiso para el Fondo de Garantía Agropecuaria- FIFOJAL
33. Fideicomiso Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado- FPBTGE
34. Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad- PEC
35. Fideicomiso Programa Nacional de Becas- MANUTENCIÓN
36. Fideicomiso Relleno Sanitario PICACHOS
37. Fideicomiso Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro- SEDAR
38. Fideicomiso Sistema MACROBUS
39. Fondo Estatal de Desastres Naturales- FOEDEN
40. Fondo Jalisco de Fomento Empresarial- FOJAL ..."(Sic).

Por tal motivo, este Comité de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con el propósito ya mencionado, tiene a bien emitir el presente dictamen de clasificación. En este sentido y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como al de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. De la misma forma, que en principio toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, **es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público** y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

SEGUNDO.- Que las bases y principios que rigen este derecho fundamental, establecidas en el apartado "A" del citado numeral, precisan que la información que se refiere a la vida privada y los datos



personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; en esta vertiente, **precisa que la Ley Reglamentaria establecerá aquella información que se considere reservada y confidencial.**

Del mismo modo, refiere que la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

TERCERO.- Que el artículo 16 segundo párrafo de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De igual manera, que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para **proteger los derechos de terceros.**

CUARTO.- Que el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, señala que toda persona que se encuentre en territorio Jalisciense gozará de los derechos y garantías que la misma establece, siendo una obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. De igual manera, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otro lado, establece que el derecho a la información pública tendrá como fundamento la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades, la información veraz y oportuna, la **protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.**

QUINTO.- Que la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es el ordenamiento reglamentario de los artículos 6° apartado A y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene por objeto principal **garantizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho humano que permite solicitar, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar aquella información pública en poder de los sujetos obligados**, así como proteger los datos personales en posesión de estos, como información confidencial de conformidad con las disposiciones legales aplicables; entre otras.

SEXTO.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince, es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y rendición de cuentas; tiene aplicación de manera supletoria al orden jurídico de esta entidad federativa, de acuerdo con lo que dispone la fracción I del punto 1 del numeral 7° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; la cual tiene como principal objetivo establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en el país.

SÉPTIMO.- Que el actual Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, es un Organismo Público autónomo, encargado principalmente de promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial. Tiene como facultad emitir y publicar, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales, los lineamientos estatales en materia de clasificación de información pública; publicación y actualización de información fundamental; protección de información confidencial y reservada, entre otras; así como de interpretar la Ley y su Reglamento en el orden administrativo.



OCTAVO.- Que derivado del cumplimiento de las obligaciones que le devienen a dicho Organismo Público garante, el día 28 veintiocho de mayo del año 2014 dos mil catorce, el Consejo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), emitió los **Lineamientos Generales** en materia de Clasificación de Información Pública; Protección de Información Confidencial y Reservada; así como los de Publicación y Actualización de Información Fundamental; mismos que fueron debidamente publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 10 diez de junio del mismo año, los cuales **tienen por objeto establecer las bases y directrices aplicables por los sujetos obligados, para el tratamiento de la información en su poder, conforme corresponda a la materia.**

NOVENO.- Que una vez recibida y analizada la solicitud de información pública de referencia, la Unidad de Transparencia tuvo a bien ordenar su búsqueda interna, en términos de lo dispuesto por los artículos 5° punto 1 fracción VII, 25 punto 1 fracción VII, 31 punto 1 fracción I, 32 punto 1 fracciones III y VIII y 83 de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objeto de cerciorarse de su existencia, recabarla y en su oportunidad resolver la solicitud de acceso a la información presentada por el solicitante; por lo que este Comité de Transparencia tiene a bien considerar la información ya contenida dentro del Procedimiento de Acceso a la Información Pública **LTAIPJ/FE/2237/2019**, y entrar al estudio de la misma, a fin de que se emita el dictamen de clasificación respecto de la improcedencia para proporcionarla, conforme se establece en la ley de la materia.

Del cual una vez analizado minuciosamente, este Comité de Transparencia advierte que la información pública requerida existe y se encuentra en posesión actualmente de este sujeto obligado, la cual es resguardada en el ámbito de su respectiva competencia. En este sentido, la presente sesión de trabajo se centra en analizar y determinar el tipo de información pública que reviste de acuerdo con lo establecido en la ley especial en la materia, así como el tratamiento que se le deberá brindar a la misma frente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, razón por la cual, este Comité de Transparencia tiene a bien efectuar el siguiente:

ANÁLISIS

De las constancias que integran el Procedimiento de Acceso a la Información Pública número **LTAIPJ/FE/2237/2019**, este Comité de Transparencia tiene a bien pronunciarse respecto del carácter con el que ha de identificarse y tratarse particularmente la información requerida por el solicitante, en lo que respecta a lo siguiente: **"...NOMBRE DE CADA ABOGADO ASIGNADO O QUE TRABAJA EN CADA DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN O ÁREA JURÍDICA. (LISTADO DE ABOGADOS POR ÁREA JURÍDICA O DEPARTAMENTO). ESTABLECIENDO LAS ÁREAS QUE ATIENDE O LOS TEMAS ATIENDE (QUE HACE CADA PERSONA QUE TRABAJA COMO ABOGADO)..."** por lo que atendiendo dicha solicitud, se procede al análisis que se le debe dar a la misma frente al Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, para lo cual, este Comité de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, advierte que la información pública requerida existe y corresponde a datos personales de servidores públicos que realizan funciones jurídicas administrativas y laborales dentro de la procuración de justicia. En este sentido, del estudio del contenido y las disposiciones legales precisadas en párrafos que anteceden, se determina que dicha información encuadra en los supuestos de restricción temporal que al efecto establecen las leyes especiales en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales; razón por la cual debe ser protegida y sólo deberá permitirse el acceso y la consulta a aquellas personas que con motivo del cargo y/o funciones desempeñadas deban tener acceso a la misma, así como a los familiares de este, cuando se haga de acuerdo con las formalidades de ley conducentes.

Lo anterior es así, toda vez que la información requerida por el solicitante, consistente en el **nombre, área de adscripción y los temas que atiende cada uno de los servidores públicos que detentan el nombramiento de ABOGADOS** adscritos a Instituciones de Gobierno del Estado de Jalisco (como lo es,



la Fiscalía del Estado de Jalisco), es información que la ley especial en la materia clasifica como de acceso restringido, con el carácter de reservada y confidencial, ya que nos encontramos ante información de **datos personales** que deben ser protegidos por esta autoridad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 3º puntos 1 y 2 fracción II incisos a) y b), 17 fracción I, 20 punto 1, 21 punto 1, 22 y 23, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en o dispuesto por el arábigo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Virtud por lo cual éste Órgano Colegiado considera que lo requerido por el solicitante constituye una **INFORMACIÓN RESERVADA y CONFIDENCIAL** de conformidad a lo dispuesto en los ordenamientos legales antes invocados; y en consecuencia éste Comité de Transparencia emite el siguiente:

DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN

PRIMERO.- En lo que corresponde a la información pretendida y consistente en: ***“...-NOMBRE DE CADA ABOGADO ASIGNADO O QUE TRABAJA EN CADA DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN O ÁREA JURÍDICA. (LISTADO DE ABOGADOS POR ÁREA JURÍDICA O DEPARTAMENTO). ESTABLECIENDO LAS ÁREAS QUE ATIENDE O LOS TEMAS ATIENDE (QUE HACE CADA PERSONA QUE TRABAJA COMO ABOGADO)...”*** así como el tratamiento que se le debe dar a la misma frente al Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. Para lo cual, este Comité de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, advierte que la información pública requerida existe y corresponde a datos personales de elementos cuyas funciones encaminadas a la investigación administrativa y laboral de los servidores públicos dentro de la procuración de justicia. En este sentido, del estudio del contenido y las disposiciones legales precisadas en párrafos que anteceden, se arriba a la conclusión jurídica para determinar que dicha información encuadra en los supuestos de restricción temporal que al efecto establecen las leyes especiales en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales; razón por la cual debe ser protegida y sólo se deberá permitir el acceso y la consulta a aquellas personas que con motivo del cargo y/o funciones desempeñadas deban tener acceso a la misma, así como a los familiares de este, cuando se haga de acuerdo con las formalidades de ley conducentes.

Lo anterior es así, toda vez que la información consistente en el **nombre, área de adscripción y los temas que atiende cada uno** es información que la ley especial en la materia considera como de acceso restringido, con el carácter de reservada y confidencial por una parte por tratarse de **datos personales** que deben ser protegidos por esta autoridad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 3º puntos 1 y 2 fracción II incisos a) y b), 20 punto 1, 21 punto 1, 22 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; correlacionadas con los numerales PRIMERO, CUADRAGÉSIMO OCTAVO, CUADRAGÉSIMO NOVENO, QUINCUAGÉSIMO, QUINCUAGÉSIMO PRIMERO y QUINCUAGÉSIMO TERCERO de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información Pública; y, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, TRIGÉSIMO TERCERO y TRIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; ambos que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que fueron debidamente publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 10 diez de junio de 2014 dos mil catorce. Del mismo modo, configura la necesidad de protección de acuerdo con las hipótesis previstas en los artículos 1º, 3º punto 1 fracciones VIII, IX y X, 9º punto 1, 10, 11, 13, 84 puntos 1 y 2, 85 y 86 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, por disposición legal expresa a la misma le deviene el carácter de **Confidencial**, y obligatoriamente debe ser restringida a terceros por parte de este sujeto obligado, ya que los ordenamientos legales mencionados anteriormente disponen que uno de los principales objetos es la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos públicos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Órganos Autónomos, Partidos Políticos y Fideicomisos Públicos que lleven reciban y/o posean datos personales, con la finalidad de regular su tratamiento. Más aún

cuando esta sea considerada como **datos personales sensibles** de acuerdo con lo establecido en el artículo 3° punto 1 fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que su entrega y difusión conlleva un riesgo grave. Cabe precisar que los mismos Lineamientos Generales emitidos por el órgano garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en Jalisco, ha emitido las directrices en las que, congruentemente con el contenido de las disposiciones legales en comento, robustecen que los datos personales deben estar protegidos y no deben ser transferidos a terceros cuando con ello se comprometa su integridad física e inclusive su vida, o lesione intereses de este, sus familiares o personas cercanas a estos.

Por otra parte, este Comité de Transparencia considera que le deviene el carácter de información **Reservada**, ya que estamos frente a una solicitud de información pública donde se requiere la entrega de datos personales de servidores públicos y es solicitada por un tercero. Al efecto, el artículo 17 punto 1 fracción I inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que es información reservada aquella cuya difusión ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; lo cual se robustece con lo dispuesto en los artículos PRIMERO, CUARTO numerales 2 y 3 y DÉCIMO SEXTO inciso d) de los Lineamientos Generales de Transparencia en la rama del sector público de seguridad pública, que fueron debidamente publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 1ro primero de octubre de 2015 dos mil quince. Si bien, es un impedimento para los sujetos obligados exigir a los interesados en obtener información pública que demuestren interés jurídico o que justifiquen la necesidad de dicha solicitud, este Comité de Transparencia advierte que la solicitud de información pública se llevó a cabo de manera anónima y en ella se está solicitando información de personal al servicio público, dependientes del Poder Ejecutivo; lo cual, este sujeto obligado desconoce el tratamiento que se le pueda dar a la misma. Por tanto, se considera que permitir el acceso a la misma conlleva un riesgo mayor, puesto que desempeñan servicios en áreas de gobierno con lo cual se comprometería su integridad física, inclusive su vida, así como la de sus familiares o terceros cercanos a ello; toda vez que no se descartan represalias en su contra. Aunado a lo anterior, con el propósito de robustecer lo señalado, este Comité de Transparencia considera oportuno precisar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere en sus numerales 1°, 2°, 5°, 7°, 19, 122 y 123, que la información relativa a los integrantes de instituciones de seguridad pública debe ser inscrita en las bases de datos del Centro Nacional de Información; caso en el cual nos encontramos, que por corresponder a instituciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, su registro se considera por ley como de carácter Reservada.

Derivado de lo anterior, es convincente enunciar que el derecho humano de acceso a la información pública **no es absoluto**, y como toda prerrogativa tiene sus limitantes; tan cierto es que el mismo numeral 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A precisa que en principio toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó en la tesis 2a. XLIII/2008 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, página 733 correspondiente al mes de abril del año 2008 dos mil ocho, que el hecho de que las leyes secundarias restrinjan temporalmente el acceso a la información pública, no constituye una violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior de acuerdo con lo que a continuación se invoca:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas



normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.

Lo anterior se robustece con el contenido de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LX/2000, publicada en la página 74 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril del año 2000 dos mil, que señala:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Resultando aplicable de igual manera el contenido del siguiente criterio de la tesis 1a. VIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, página 656, correspondiente al mes de febrero del año 2012 dos mil doce, materia Constitucional, que a continuación se invoca:

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la



estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Del mismo modo, encuentra límites al establecer que se trata de información confidencial, de acuerdo con el contenido de la tesis 1a. VII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, página 655, correspondiente al mes de febrero del año 2012 dos mil doce, materia Constitucional, que a continuación se invoca:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene sustento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales - así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.





Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es de aplicación supletoria al orden jurídico del Estado de Jalisco, dispone en su artículo 113 fracción V que podrá clasificarse como **reservada** aquella información cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de alguna persona física; caso en el cual nos encontramos, ya que como se mencionó anteriormente, las personas de las cuales se está solicitando información, propiamente datos personales de estas, desempeñan funciones públicas dependientes del Gobierno del Estado, y en consecuencia el propiciar datos personales a terceros ajenos a dichos servidores públicos pudiera ocasionar riesgos en su integridad física y en su vida, así como en sus familiares, con la finalidad de perjudicar sus funciones por parte de la delincuencia.

Ahora bien, el artículo 116 del mismo ordenamiento legal refiere que es considerada como información **confidencial** la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; la misma no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Lo anterior se configura con el contenido del artículo VIGÉSIMO TERCERO de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, emitidos por acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, debidamente publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 quince de abril del año 2016 dos mil dieciséis, que tienen por objeto establecer criterios con base en los cuales clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas; el cual dispone que, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es necesario acreditar el vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su seguridad o su salud. Lo anterior, ya que como de manera reiterada y sistemática se ha venido mencionando, dichos empleados al servicio del Gobierno del Estado se encuentran sujetos a represalias o actos encaminados a la comisión de delitos por terceros que obtengan datos personales de empleados al servicio del Gobierno del Estado de Jalisco. Motivo por el cual este Comité de Transparencia considera adecuado proteger y mantener bajo restricción dicha información, siendo permisible solo a sus titulares, así como de aquellas autoridades que en el ámbito de su competencia y de manera justificada la requieran.

Si bien, se trata de empleados al servicio público, es de destacar que existen limitantes para difundir datos personales como ciudadanos que son; en este sentido, la categoría de servidor público no extingue la protección que consagran a su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Estado de Jalisco y sus Municipios, los Lineamientos Generales en materia de: Clasificación de Información Pública y de Protección de Información Confidencial y Reservada, los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Por tanto, por disposición legal expresa, que le es aplicable al caso en concreto, conserva una clasificación permanente como de información confidencial, y su transmisión queda supeditada a la voluntad de sus titulares. En consecuencia, este Comité de Transparencia se encuentra impedido para ordenar la difusión de dicha información a persona alguna distinta a las que por ley pueda o deba tener acceso a la misma, sino por el contrario, se encuentra obligado a proteger su identidad, máxime que la intención del solicitante es obtener una plena identificación, lo cual es evidente que contraviene los principios y las bases que rigen al derecho de acceso a la información pública, sin perjuicio de lo que al efecto establece la protección de su información.

Por lo anterior, del análisis lógico jurídico, y de la interpretación sistemática de los preceptos invocados y los transcritos en el cuerpo del presente instrumento, **ponderando los intereses en conflicto**, adecuadamente este Comité de Transparencia arriba a la conclusión para determinar que la revelación, difusión y/o entrega de la información solicitada, produce los siguientes:

DAÑOS

DAÑO ESPECÍFICO.- Se estima que el daño que produce su acceso, entrega y/o difusión contraviene disposiciones de orden público, y atenta contra la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados, que se hace consistir en las consecuencias que pudieran tener los servidores públicos dependientes del Gobierno del Estado, ya que los datos solicitados son de carácter personal, en virtud de que se daría a conocer “...**NOMBRE DE CADA ABOGADO ASIGNADO O QUE TRABAJA EN CADA DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN O ÁREA JURÍDICA. (LISTADO DE ABOGADOS POR ÁREA JURÍDICA O DEPARTAMENTO). ESTABLECIENDO LAS ÁREAS QUE ATIENDE O LOS TEMAS ATIENDE (QUE HACE CADA PERSONA QUE TRABAJA COMO ABOGADO)**...” lo que ocasionaría un control detallado personalizado de cada servidor público con nombramiento de “abogado” cuya información pudiera ser mal utilizada por terceros ajenos a cada servidor público, transgrediendo así, los derechos humanos que deben ser garantizados y respetados por esta autoridad en el ejercicio de sus obligaciones y atribuciones, especialmente en el tratamiento de información confidencial, así como de aquella que constituya información reservada que deba ser protegida a fin de salvaguardar la integridad física y la vida de los gobernados.

DAÑO PRESENTE.- Tomando en consideración que la solicitud de información pública versa en obtener datos personales de terceros, específicamente de servidores públicos dependientes del Gobierno del Estado de Jalisco, y en consecuencia el daño presente se configura al momento de hacer público su nombre y referentes laborales (fecha de ingreso, nombramiento, área de adscripción y salario), toda vez con ello se estaría en posibilidad de identificarlos y, especialmente, se comprometería la integridad física, de sus familiares, inclusive su vida y la de las personas cercanas a este.

DAÑO PROBABLE.- Este Comité de Transparencia considera que existe la probabilidad de que, al difundir el nombre de servidores públicos dependientes del Gobierno del Estado de Jalisco y relacionado con su estatus laboral, puedan estar plenamente identificados, y con ello se pueda planear y producir un daño irreparable en contra de los mencionados y de sus familiares como represalias en el servicio desempeñado. Además de la ineludible responsabilidad que recaería en esta Fiscalía del Estado de Jalisco, especialmente en los integrantes de este Comité de Transparencia, por la inobservancia de dichas disposiciones legales.

Por lo anterior, a consideración del Comité de Transparencia se justifica la necesidad de limitar temporalmente el acceso a dicha información pública y, como consecuencia, se:

CONCLUYE

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia, determina que respecto a la información pública solicitada dentro del Procedimiento de Acceso a la Información Pública número **LTAIP/FE/2237/2019**, consistente en: “...**NOMBRE DE CADA ABOGADO ASIGNADO O QUE TRABAJA EN CADA DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN O ÁREA JURÍDICA. (LISTADO DE ABOGADOS POR ÁREA JURÍDICA O DEPARTAMENTO). ESTABLECIENDO LAS ÁREAS QUE ATIENDE O LOS TEMAS ATIENDE (QUE HACE CADA PERSONA QUE TRABAJA COMO ABOGADO)**...” (sic), encuadra en los supuestos de información pública de restricción, establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el carácter de RESERVADA y CONFIDENCIAL.

SEGUNDO.- Que el plazo por el cual deberá mantenerse en reserva es el máximo previsto en el numeral 19 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

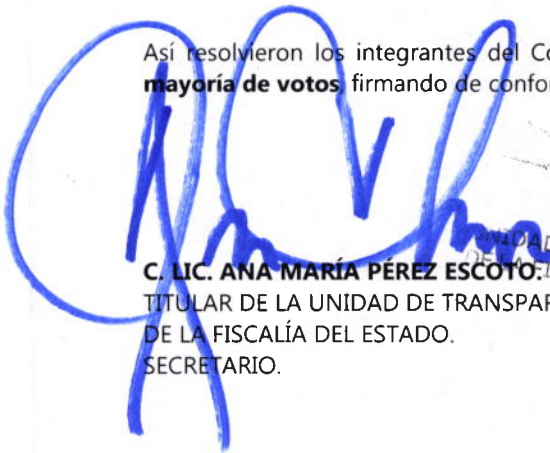


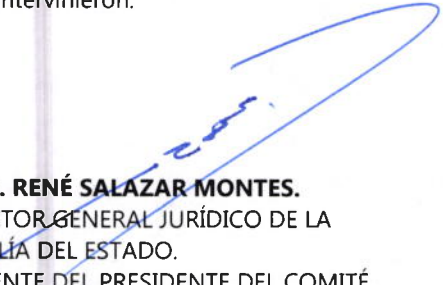
TERCERO.- Regístrese la presente acta en el índice de información Reservada y publicarse en medios de consulta directa, tal y como lo establece el artículo 25 punto 1 fracción XI de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTO.- Este Comité de Transparencia tiene a bien instruir a la Unidad de Transparencia para efecto de que, en vía de cumplimiento, notifique del contenido del presente dictamen al solicitante, y con ello se justifique la negativa para proporcionar la información solicitada, por haber sido clasificada temporalmente como de carácter Reservada.

CIERRE DE SESIÓN

Así resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por **mayoría de votos** firmando de conformidad los que en ella intervinieron.


C. LIC. ANA MARÍA PÉREZ ESCOTO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALÍA DEL ESTADO.
SECRETARIO.


C. LIC. RENÉ SALAZAR MONTES.
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA
FISCALÍA DEL ESTADO.
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ.

MLRR/LAN/VMGP